

Desde hace años, los sectores reaccionarios del país vienen justificando con argumentos falsos y tendenciosos la creciente usurpación del poder de compra de los sectores mayoritarios de la nación. En esta forma, los defensores del capitalismo se las han arreglado para encajonar la lucha social dentro de un esquema que no abre ninguna posibilidad de elevar en forma sustancial los niveles de vida del pueblo y de romper las actuales estructuras causantes directas del retroceso y de la miseria. En cambio, esteriliza la capacidad combativa de los trabajadores, desangrándola en una guerrilla interminable, sin esperanzas y sin porvenir.

Toda la energía de los asalariados se concentra anualmente en un solo objetivo: recuperar, sólo recuperar el poder adquisitivo perdido en los años anteriores. No mejorarlo. Escasamente mantenerlo. Durante 25 años, los trabajadores chilenos han combatido con molinos de viento. Nada, o muy poco, han ganado en esta dura batalla por superar su miserable condición de explotados. La fría e incommovible realidad de las cifras así lo comprueba. En los últimos 25 años, el ingreso nacional creció a un ritmo promedio de 3.6 por ciento al año, esto es, 1,4 por ciento por habitante. En un mundo que avanza a pasos prodigiosos, Chile exhibe uno de los índices de crecimiento más bajos del mundo. Y si muy poco hemos adelantado en la creación de riquezas, la distribución de ella, prácticamente se ha mantenido igual. Cuarenta por ciento de la renta nacional se reparte entre la inmensa mayoría de los asalariados. En cambio, el reducido grupo de capitalistas se lleva cincuenta y cinco por ciento de ella.

A pesar de la violencia que muchas veces caracterizó la lucha social; de las mil y una pequeñas reivindicaciones conquistadas a lo largo de los años por los trabajadores en su amarga batalla diaria, nada definitivo han ganado. Más de una vez en los años transcurridos, el pueblo se sintió profundamente conmovido y esperanzado al conjuro de la victoria de fuerzas aparentemente progresistas y renovadoras. Sin embargo, el análisis histórico de las cifras demuestra lo poco que esas victorias significaron para los asalariados. Las cosas siempre retornaron a su secular centro de equilibrio.

En 1940, los obreros participaban en 23,8% de la renta nacional. Hoy, 25 años después de implacable lucha por mejorar su cuota en el reparto de la riqueza colectiva, se llevan 20,6%. Como los cangrejos, los obreros caminaron para atrás. Los empleados obtuvieron algunas ventajas relativas: del 13,5%, se encaramaron a 19,6%. En conjunto, obreros y

empleados mejoraron su posición, de 37,3% a 40,2%. Los sueldos y salarios en valores reales promedios se han mantenido prácticamente estacionarios.

La población ocupada de Chile asciende en la actualidad a 2.650.000 personas, de las cuales 1.600 mil son obreros, 570 mil empleados y 480 mil capitalistas. Pero de estos teóricos 480 mil capitalistas, 440 mil son trabajadores independientes: lustrabotas, carpinteros, gasfitters, peluqueros, artesanos, pequeños industriales, etc., cuyas condiciones de niveles de ingresos se equiparan a las de los asalariados. En consecuencia, los capitalistas propiamente tales, no son más de 40.000.

Ahora bien, ¿cómo se distribuye el producto nacional entre estos sectores de la población? 1.600 mil obreros perciben 19,6% de la renta nacional; 440 mil trabajadores independientes ganan 25,3% de la renta nacional, y los 40.000 capitalistas perciben 30,2% de dicha renta. El resto del porcentaje, hasta completar 100%, corresponde a aportes patronales a las Cajas de Previsión.

El cuadro anterior demuestra la violenta e injusta desigualdad imperante en la distribución de la renta nacional. Desigualdad que ningún Gobierno ha logrado corregir o alterar esencialmente.

En la página 451 del libro "Geografía Económica de Chile", publicado por la CORFO, se lee:

"En el período 1955-59 el producto geográfico bruto aumentó con una tasa promedio de sólo 2,6% al año y el producto geográfico bruto per cápita creció con una tasa anual promedio de 0,2%. En cuanto al ingreso nacional su aumento promedio se hizo con la tasa de 3,6% al año, mientras que el ingreso per cápita subió con una tasa promedio de 1%. Según el Instituto de Economía de la Universidad de Chile, en 1961 el sueldo medio por persona en la administración pública era de 82,1% de ese sueldo en 1950. Expresado en valores constantes, en 1950, el sueldo medio fiscal por persona era de 8.246 pesos al mes, mientras que, en 1961 ese sueldo no llegaba a 6.771 pesos. En lo que respecta al sector particular, también en valores constantes, el sueldo vital para el departamento de Santiago era en 1950 de 3.800 pesos mensuales, mientras que en 1961 es sólo de 3.098 pesos".

Otro estudio, practicado por el Instituto de Economía de la Universidad de Chile, comprueba cómo un tercio de la población (3 millones de habitantes) vive con ingresos inferiores a un sueldo vital, y más del 54%, menores que dos sueldos vitales.

Esto prueba una vez más, que las luchas sindicales por conquistar meras reivindicaciones económicas, si bien tienen un justificado carácter defensivo en su proyección histórica, carecen de sentido. La gran batalla de los trabajadores debe ser por cambiar el sistema económico. Mientras él impere, siempre las cosas retornarán a su centro habitual. El régimen liberal capitalista tiene sus propias leyes y ellas no pueden ser alteradas impunemente. Quien acepta el sistema tiene que aceptar consecuentemente sus resultados.

Los sectores plutocráticos, terratenientes, monopolistas, banqueros, industriales y fundamentalmente imperialistas han conservado incólume en la práctica, su inmensa cuota en la injusta distribución de la riqueza nacional.

Bajo cualesquiera de los Gobiernos triunfantes, con Alessandri, padre, o bajo la restauración reaccionaria de Alessandri, hijo; con el advenimiento del Frente Popular o en la Administración del General Ibáñez; con Gabriel González o con Eduardo Frei, el pueblo, los trabajadores, el empleado público o bancario, el profesor primario o el obrero de las minas, el campesino o el soldado, el hombre concreto que vive de su trabajo, permaneció idéntico en su pobreza física y en su frustración espiritual.

La clase dominante los tiene metidos en un zapato chino. Ellos, todos ellos, 2.200.000 trabajadores, sólo pueden aspirar a repartirse hasta el 40% de la renta nacional. Temporalmente algunos sectores de asalariados podían empinarse sobre otros; pero, en definitiva y en conjunto, no se les permite romper el nivel fijado por la plutocracia gobernante. Con sueldos y salarios mínimos, con vacaciones y sistemas previsionales, con asignaciones de estímulo o con semana corrida, la parte por distribuir entre los trabajadores es siempre la misma: 40%.

Los explotadores, usufructuarios seculares del régimen y del poder del Estado, tienen mil formas de recuperar lo que aparecen transitoriamente cediendo: desvalorizan la moneda como lo hacen desde hace cien años; aplican impuestos indirectos; se hacen otorgar cuantiosas subvenciones estatales; transfieren sus deudas al fisco cuando les son demasiado gravosas; endosan sus negocios al Estado cuando ya no les son convenientes; suben los precios mediante miles de artimañas; especulan y roban los caudales públicos; se benefician con inmensos privilegios tributarios y exasperantes exenciones aduaneras (anualmente se conceden más de 800 millones de escudos en liberaciones); se adjudican propuestas millonarias; perciben fantásticas comisiones por negocios públicos, etc. El hecho incontestable y dramático es que, cualesquiera que hayan sido el gobierno y las circunstancias dominantes, los llamados guardianes del orden público, los patriotas insobornables, los presuntos paladines de la democracia; en una palabra, la plutocracia oligárquica, usurpa y se apropia aproximadamente de 55% de la renta nacional, producida por el trabajo de millones de obreros, campesinos, empleados y técnicos. Repetimos que nada puede hacerse contra esta atroz injusticia si se acepta mantener el sistema liberal capitalista que nos rige.

Los reajustes periódicos graciosamente aprobados por los sectores plutocráticos constituyen un gravísimo factor de distorsión de la lucha social, al crear en amplios sectores asalariados la engañosa y falaz impresión de ser posible mejorar su precaria condición de explotados mediante ocasionales y transitorios beneficios económicos. Año a año, miles de personas, individualmente y representantes de vastas organizaciones de trabajadores, pretenden resolver sus graves problemas de subsistencia por medio de una gama increíble, heterogénea y contradictoria de indicaciones. Sabemos positivamente que ésta no es una solución, pero nos encontramos en un callejón sin salida. Por lo menos ellas sirven para reducir, siquiera en parte, los crueles desniveles imperantes en una sociedad de clases, burguesa y capitalista.

Por eso, los socialistas chilenos afirmamos que hemos cerrado un ciclo en la lucha social y política de nuestro país. Estamos firmemente

convencidos de que no es posible reincidir repitiendo la experiencia acumulada durante los últimos treinta años. No creemos en cambios graduales, ni estamos por los gobiernos de colaboración de clases. Sólo amortiguan y reducen temporalmente las violentas contradicciones características del régimen burgués. El intervencionismo estatal inorgánico, improvisado y demagógico ha hecho crisis. Creemos sólo en deficiencias claras.

La Democracia Cristiana intenta una vez más, y seguramente la última, reanimar el fuego sagrado del capitalismo recurriendo a las viejas prácticas de un intervencionismo estatal estéril, deformador, populista y demagógico.

EL REGIMEN CAPITALISTA ES INCAPAZ DE AUMENTAR EL BIENESTAR DE LAS GRANDES MASAS

A nuestro juicio, la incapacidad de crecimiento, reiteradamente demostrada por la economía chilena y por las restantes economías de las diecinueve repúblicas latinoamericanas, tiene su verdadera explicación en la estructura económica, social y política predominante en ella. Y esta estructura no es otra que la de un sistema capitalista ineficiente, estrangulado por la explotación imperialista, e impotente para desatar por sí mismo el progreso.

La etapa democrática burguesa es una fase imposible en nuestro proceso. Las burguesías nacionales se han demostrado incapaces de constituir el factor dinámico que impulse el desarrollo y abra perspectivas nuevas a los millones de millones de hombres y mujeres que se incorporan anualmente al mercado del trabajo.

En Europa y en Estados Unidos, debido a condiciones de desarrollo históricamente diferentes, las burguesías nacionales sostienen al Estado. En América Latina y en Chile, es el Estado quien sostiene a las burguesías. Al amparo del proteccionismo estatal controlan el mercado e impiden la libre competencia. El escaso excedente económico generado por ellas se derrocha en especulaciones financieras, consumos suntuarios, viajes turísticos y fugas de capitales. Son burguesías dependientes. Viven de la protección estatal y bajo el alero imperialista. Si Estados Unidos no financiara su precaria existencia de clase, habrían desaparecido. El único dique de contención para una auténtica revolución social en América Latina es el imperialismo. Así se ha demostrado en Brasil y en Santo Domingo. Estados Unidos mantiene en la mayoría de nuestras repúblicas ejércitos dependientes del Pentágono, sometidos a sus intereses geopolíticos mundiales y con la misión muy concreta de defender sus fabulosos imperios monopólicos y la riqueza de las oligarquías nativas. Esta realidad innegable se expresa abierta y vergonzosamente en el intento cínico de construir una Fuerza Interamericana de Defensa. ¿Defensa de qué? Defensa del 55% de la renta nacional que se reparte entre oligarcas criollos e imperialistas extranjeros.

Y éste es el gran dilema de la Democracia Cristiana. Aun cuando reconoce la necesidad de introducir cambios radicales y profundos en la estructura social y política del país, respeta el régimen capitalista, proclama su adhesión al sistema de libre empresa y acepta como una fata-

lidad geográfica e histórica nuestra degradante dependencia del imperialismo norteamericano. Por eso afirmamos que la Democracia Cristiana no es una fuerza realmente revolucionaria. Son revolucionarios aquellos que aspiran a sustituir un régimen por otro distinto. La Democracia Cristiana es sólo un movimiento reformista. Cuando más, desea mejorar o perfeccionar los mecanismos de producción, consumo y distribución de la actual sociedad clasista. Y como reformista, repite el mismo error nuestro, cuando en épocas pasadas de la historia, transitoriamente, contribuimos a formar parte de gobiernos híbridos, los cuales estaban animados solamente de un vago y difuso progresismo social y carecían de real contenido revolucionario. Con la solvencia que nos da esta experiencia y la de muchas otras naciones, afirmamos categóricamente: el reformismo populista y demagógico no resuelve los problemas de Chile y, por lo contrario, tanto en nuestro país como en los de toda América, ha acentuado las tensiones sociales y agravado los problemas económicos.

El modelo de desarrollo capitalista no puede constituir un esquema ideal que sirva de pauta sugestiva conforme a la cual se dinamicen las energías creadoras de las naciones. En el hecho, sólo los países que se han liberado de la opresión imperial y han adoptado el sistema de vida y de producción socialista, exhiben elevadas tasas de crecimiento económico y prosperidad material. Los países restantes vegetamos en el obscuro ciclo de la miseria.

El Gobierno demócratacristiano no sabe como romper este ciclo. Su característica esencial es la indefinición política. Dice ser anticapitalista, pero proclama su adhesión al sistema de la iniciativa privada y de la libre empresa. Se dice antimperialista, pero nunca como ahora dependemos más de la llamada ayuda norteamericana. Lo único claro en su postura ideológica es la intención de llevar adelante una política de promoción social. Pero un país sólo puede proponerse las metas de bienestar que su aparato productivo está en condiciones de financiar. Mejorar los niveles de vida implica encontrar fuentes adecuadas de nuevos recursos, resultantes de la creación de una nueva estructura económica productiva. De lo contrario, se cae en lo que se ha llamado "la Revolución de las Aspiraciones", la que a su vez genera una grave disociación entre lo que un país aspira a ser y lo que puede ser. A nuestro juicio, este es uno de los puntos más débiles del Gobierno de la Democracia Cristiana y ha de provocar importantes efectos psicológicos en los diferentes niveles de la comunidad. No se puede impunemente hablar de revolución y definirse como anticapitalista y antimperialista, y, sin embargo, no hacer la revolución, vivir del capitalismo y cobijarse a la sombra del imperialismo. Las medidas de promoción popular propuestas por el Gobierno sólo favorecerán aparentemente a los trabajadores, por no estar destinadas a integrar a la población en un vasto proceso dinámico de creación de riquezas. Se persigue únicamente satisfacer las inquietudes del pueblo para contener el proceso revolucionario por medio del cual los trabajadores encontrarían su verdadera emancipación. Se pretende reorientar las presiones de las masas hacia el logro hipotético de mejores niveles de vida expresado en televisores, teléfonos, máquinas de coser, paquetes Cáritas, etc., y evitar de este modo que los

trabajadores luchen por su único y gran objetivo histórico: sustituir el régimen capitalista de explotación por un sistema socialista. En el fondo, se reemplaza una política revolucionaria por una política asistencial. El Gobierno actual sabe cómo disciplinar socialmente al pueblo para distraerlo de su verdadero objetivo de clase, pero ignora cómo organizar económicamente a la nación para hacerla producir más.

No caben más indecisiones. Las cómodas posturas centristas no resuelven el drama nacional. Los Gobiernos de Centro, al pretender dar gusto a todos y no herir los intereses de nadie, sólo pueden subsistir a costa de un creciente endeudamiento externo y de una grave inflación interna. Chile urge remedios heroicos.

El reformismo ha muerto. Sólo cabe reemplazarlo por una conducta consecuentemente revolucionaria, que materialice la profunda voluntad de cambios gestada en la entraña de la nacionalidad y realice la transformación radical de la sociedad, tal como reiteradamente se prometió al país durante la pasada campaña presidencial.

CARLOS ALTAMIRANO O.